



NACIONES UNIDAS



Distr.
LIMITADA

LC/L.2757
25 de septiembre de 2007

ORIGINAL: ESPAÑOL

**INFORME DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE POBLACIÓN,
DESIGUALDADES Y DERECHOS HUMANOS**

Santiago de Chile, 26 y 27 de octubre de 2006

ÍNDICE

	<i>Página</i>
A. PRESENTACIÓN	1
B. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS	1
Lugar y fecha de la reunión	1
Asistencia	1
Organización de los trabajos	1
Documentación.....	2
C. TEMARIO.....	2
D. DESARROLLO DE LA REUNIÓN	2
Anexo - Lista de participantes.....	15

A. PRESENTACIÓN

La Reunión de Expertos sobre Población, Desigualdades y Derechos Humanos fue organizada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, en coordinación con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y contó con el apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

La reunión se celebró como parte del programa regular de trabajo del CELADE-División de Población de la CEPAL y del programa regional del UNFPA y en ella se abordaron temas fundamentales para la comprensión y el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de las dinámicas demográficas y el desarrollo.

B. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Lugar y fecha de la reunión

La Reunión de Expertos sobre Población, Desigualdades y Derechos Humanos tuvo lugar en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, los días 26 y 27 de octubre de 2006.

Asistencia¹

La reunión convocó a un grupo de expertos en temas de población, economía, salud reproductiva y sexual, envejecimiento, migración internacional y derechos humanos, provenientes de organizaciones internacionales, gobiernos, centros académicos y organizaciones de la sociedad civil. La reunión contó con la presencia de funcionarios del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de Envejecimiento de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud. Las mesas de trabajo estuvieron conformadas por expositores de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y República Dominicana.

Organización de los trabajos

La reunión estuvo dedicada al análisis de los siguientes temas:

- a) enfoque conceptual de la relación entre la población, las desigualdades sociales y los derechos humanos;
- b) relaciones entre población y derechos humanos;
- c) mecanismos e indicadores para asegurar la exigibilidad de los derechos humanos.

¹ Véase la lista de participantes en el Anexo.

Para la consideración del segundo de estos temas, se organizaron tres paneles de expertos que analizaron los siguientes puntos: i) salud sexual y reproductiva, ii) migración internacional y iii) envejecimiento.

Documentación

Las ponencias presentadas por los expertos, que fueron distribuidas al comienzo de la reunión y grabadas en CD, pueden consultarse asimismo en www.cepal.org/celade.

C. TEMARIO

La reunión se desarrolló con arreglo al siguiente temario:

1. Población, desigualdades y derechos humanos: un enfoque global
2. Relaciones entre población y derechos humanos
 - a) Salud sexual y reproductiva
 - b) Migración internacional
 - c) Envejecimiento
3. Exigibilidad en derechos humanos: mecanismos e indicadores

D. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Sesión inaugural

En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra Dirk Jaspers-Faijer, Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, y Jairo Palacio, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú y Director para Chile y Paraguay.

El Director del CELADE-División de Población de la CEPAL señaló que la reunión era una respuesta al desafío planteado por la CEPAL de crear un nuevo pacto de protección social centrado en los derechos, por lo que representaba una oportunidad para los organismos internacionales, los gobiernos y la sociedad civil de debatir sobre la puesta en práctica del enfoque de derechos en los temas de población, adoptado por el CELADE en la prestación de servicios a los países miembros. Destacó que este enfoque de derechos humanos era un marco ético indispensable necesario para realzar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas en materia de población. Ya desde hace varias décadas los fenómenos demográficos se han relacionado con los derechos humanos, lo que quedó se manifestó claramente en la Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas (Bucarest, 1974) y en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994). Esto ha llevado a vincular los temas de fecundidad y mortalidad con el derecho a la salud y, con el paso del tiempo, se han establecido otras relaciones entre la dinámica demográfica y la exclusión social, el desarrollo y los derechos humanos y los fenómenos como

el envejecimiento de la población, la equidad de género, la salud reproductiva y sexual y la problemática de los pueblos indígenas. Esta interrelación se ha estudiado fundamentalmente en vista de los efectos de la globalización, la discriminación y la vulnerabilidad de los inmigrantes en países desarrollados y en vías de desarrollo. Por último, el orador destacó que los países habían cumplido con los compromisos adquiridos, destinando esfuerzos para la superación de las desigualdades sociales y demográficas, pese a lo cual persistían las brechas, por lo que invitó a todos participantes a continuar deliberando para contribuir a aminorar las desigualdades sociales.

El representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Perú y Director para Chile y Paraguay citó a Kofi Annan, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas: “No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos”. A continuación, se refirió a la urgencia de considerar los derechos humanos, no solo como un imperativo ético y moral, sino como la clave del desarrollo de toda la sociedad. De hecho, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo había sido adoptado por unanimidad por 179 países y contenía el reconocimiento explícito de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En el marco del proceso de reforma de las Naciones Unidas, el UNFPA se había comprometido en 2003 a aplicar el enfoque de derechos en todas sus actividades a nivel internacional, lo que constituyó una evolución conceptual fundamental.

Población, desigualdades y derechos humanos: un enfoque global (punto 1 del temario)

La mesa redonda estuvo moderada por Mercedes Borrero, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Ecuador, y contó con la participación de José Bengoa, Representante de la Subcomisión de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Andras Uthoff, Oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, en representación de Martín Hopenhayn, experto principal de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, y Jorge Martínez y Marcela Ferrer, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL. Los comentarios estuvieron a cargo de Sara Gordon, de la Universidad Autónoma de México.

En esta mesa se abordó la relación existente entre la pobreza y los derechos humanos, luego se presentó la problemática de las desigualdades sociales en la región y la propuesta de la CEPAL de generar un nuevo pacto de protección social y, por último, se expuso la relación entre los fenómenos de población y la adopción del enfoque de derechos, desde una perspectiva conceptual y latinoamericana.

El representante de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos dio a conocer la resolución 2006/9 titulada “Aplicación de las normas vigentes de derechos humanos en el contexto de la lucha contra la extrema pobreza” del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (agosto de 2006), texto cuya importancia radica en ser el proyecto de declaración internacional sobre los derechos de los pobres. Tras reconocerse que la pobreza es una consecuencia de la violación sistemática de los derechos humanos, la comunidad internacional ha comenzado a considerarla, no ya como un tema económico, sino como un tema de derechos. En reuniones y conferencias de expertos se ha establecido una normativa al respecto, que permite exigir la reparación del derecho vulnerado. Es por ello que la aplicación de esta perspectiva supone la aplicación de todo un sistema de derechos, obligaciones y sanciones.

Sin embargo, subrayó que persistía la imagen de la pobreza como una externalidad de los procesos económicos, por lo que la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales al

sistema de sanciones era un objetivo importante de la comunidad internacional. En cuanto a la indivisibilidad de los derechos, la situación de pobreza es el fenómeno en que se manifiesta más claramente la interrelación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales; si una persona pobre no puede ejercer sus derechos civiles y políticos, difícilmente podrá ejercer los demás y viceversa. En cuanto a la progresividad, indicó que hay derechos en el plano económico que son de realización inmediata, como los vinculados al hambre y la miseria.

El Oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL se refirió a cuatro temas relacionados con el pacto de protección social propuesto por la CEPAL en su trigésimo primer período de sesiones.²

En primer lugar, hizo hincapié en el carácter indivisible de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, tanto desde el punto de vista ético como práctico. Mientras los derechos civiles y políticos apuntan a garantizar las libertades básicas, los derechos económicos, sociales y culturales buscan democratizar la ciudadanía social.

El segundo tema que abordó es el de las asimetrías entre derechos y políticas: mientras los derechos civiles y políticos se han consolidado en general en la región, los derechos económicos, sociales y culturales no han evolucionado de la misma manera, sobre todo en lo que respecta a la pobreza. Además, han surgido nuevos fenómenos —la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad externa, entre otros— que, unidos a los cambios en el paradigma del trabajo, han acentuado la exclusión y la dificultad para garantizar la protección social. En tercer lugar mencionó que la relación entre poder y privilegio daba origen a una doble exclusión, de los recursos y los activos, y a una diferencia entre los avances en materia de derechos políticos y de derechos económicos, sociales y culturales.

Lo anterior había llevado a la CEPAL a proponer un pacto de protección social y a desarrollar y fomentar la formulación de estrategias nacionales, regionales y mundiales. Específicamente, el pacto de protección social remite a estrategias que se pueden aplicar a nivel nacional, en el ámbito de las políticas macroeconómicas, y al establecimiento de pactos sólidos que garanticen la estabilidad política. La protección social actualmente se sustenta en los supuestos de un mercado de trabajo formal y una familia establecida, cosas que en la práctica no se dan, lo que hace que estos sistemas sean completamente excluyentes. En consecuencia, se requiere de un nuevo contrato social para universalizar la protección social.

El representante del CELADE-División de Población de la CEPAL señaló que la vinculación conceptual entre los temas de población y desarrollo y los derechos humanos implica necesariamente establecer un diálogo entre los planos macrosocial y microsocioal. Dado que las tendencias demográficas son producto de comportamientos individuales, se trata de identificar el grado de vinculación y conciliación entre los intereses sociales que rigen la dinámica y el estado de la población y los intereses individuales referidos a los aspectos que inciden en ambos.

Además de las relaciones mencionadas, los derechos pueden vincularse al campo de la población y el desarrollo tanto si tienen una pertinencia constitutiva (es decir, si habilitan a los seres humanos a tomar decisiones libres e informadas) como una pertinencia instrumental (es decir, si contribuyen a tomar decisiones libres e informadas).

² *La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad* (LC/G.2294(SES.31/3)/E), Santiago de Chile, febrero de 2006.

La adopción de esta perspectiva como punto de inicio de la aplicación del enfoque de derechos tiene una serie de corolarios importantes de analizar. Por lo tanto, se hacía necesario que los gobiernos orientaran los procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en el campo de la población y el desarrollo desde un enfoque de derechos y ampliaran las fronteras de investigación y respondieran a las demandas de protección de los derechos.

En los comentarios al panel se señaló que debido a la complejidad de los procesos sociales no era posible atribuir únicamente al Estado la responsabilidad de resguardar los derechos humanos, sino que esta cabía a los distintos actores sociales. También se hizo referencia a la gran tolerancia a la desigualdad que existe en América Latina, algo que es necesario modificar.

En la ronda de discusiones de la mesa se abordó la relación existente entre la idea de integración social y el establecimiento de un nuevo pacto de protección social. En ese sentido, se señaló que en el imaginario social la pobreza se considera como algo dado, lo que impide su consideración como un tema de derechos. También se señaló que hasta ese momento las variables demográficas, los procesos de cambio en la estructura familiar y el mercado de trabajo informal habían sido omitidos en los esquemas de protección social, y que era necesario integrarlos para que los sistemas fueran inclusivos.

Relaciones entre población y derechos humanos (punto 2 del temario)

Esta mesa estuvo compuesta por tres paneles, dedicados a los siguientes temas: salud sexual y reproductiva, migración internacional y envejecimiento.

a) Salud sexual y reproductiva

El panel sobre salud sexual y reproductiva estuvo integrado por Lilian Sepúlveda, representante del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos; Alejandro Morlachetti, abogado y consultor en derechos humanos; Ana Elena Badilla, consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica, y Violeta Bermúdez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Perú.

La representante del Centro de Derechos Reproductivos manifestó que estos podían considerarse derechos humanos porque se sustentaban en dos derechos reconocidos: el derecho a la autonomía reproductiva (libertad de decisión en cuanto al número y espaciamiento de los hijos) y el derecho a la salud (aborto legal y seguro, anticoncepción de emergencia, información y cuidados durante el embarazo). Ambos han sido consagrados en muchos acuerdos internacionales, en los que los gobiernos se han comprometido a avalarlos y protegerlos.

La expositora señaló que en los últimos años en América Latina y el Caribe se había producido una transformación legislativa y judicial con respecto al aborto, pero las normas sobre la materia eran objeto de constantes transgresiones, debido a la existencia de vacíos legales en la legislación de los países. En cuanto a la anticoncepción de emergencia, recordó que en varios países la anticoncepción de emergencia estaba absolutamente prohibida y que el tema había generado una marcada oposición en la región por parte de grupos conservadores y religiosos.

El abogado y consultor en derechos humanos reflexionó sobre la importancia del carácter obligatorio del respeto de los derechos humanos a partir de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969.

A continuación, se refirió a las instancias del derecho internacional en las que se habían reconocido los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes, entre otros, en el ámbito del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en los que se ha reconocido que la salud sexual y reproductiva forma parte del derecho a la salud. Recordó que el Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período de sesiones de la CEPAL también había señalado que en las políticas públicas se deben reconocer los derechos reproductivos y que, entre los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas se había establecido el del acceso a los servicios de salud reproductiva.

Con respecto a la obligación de los Estados, dijo que estos debían garantizar el acceso a la información y a la educación sexual y reproductiva, a los servicios seguros, adecuados y universales, y a los servicios sociales y legales que respalden el ejercicio de esos derechos. Refiriéndose luego al concepto de ciudadanía, concebido como el derecho a tener y ejercer derechos, subrayó que su aplicación en la esfera de las políticas suponía abandonar el concepto de que los jóvenes eran un problema y considerarlos como sujetos de derechos. Asimismo, señaló que las políticas sobre salud sexual y reproductiva para los y las adolescentes y jóvenes debían orientarse a mejorar sus condiciones de vida, fomentando la equidad generacional y de género, propiciando el desarrollo de las capacidades, y garantizando el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas de Costa Rica inició su presentación subrayando que respetar los derechos de las personas con VIH/SIDA era respetar los derechos de todos. Recordó la existencia de un marco normativo internacional que garantizaba los derechos en materia de VIH/SIDA. Específicamente, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo se han adoptado importantes convenios sobre el tema, dado que en el ámbito laboral son más comunes las violaciones de los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA.

La expositora hizo una reseña de las directrices internacionales sobre la materia desarrolladas a partir de 1997 y se refirió ampliamente a los avances logrados en materia de tutela y reconocimiento de los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA en algunos países. En general, en América Latina y el Caribe no se ha desarrollado suficientemente la legislación sobre este tema y pocos países cuentan con leyes o políticas específicas que consagren esos derechos. Los países enfrentan diversas limitaciones en este sentido, siendo la más grave de ellas la falta de recursos financieros. Entre los obstáculos que mencionó se encuentra el hecho de que en la mayoría de los países el Ministerio de Salud es la instancia nacional encargada de aplicar las políticas contra el VIH/SIDA, pero no tiene incidencia directa en la normativa. Hizo referencia también a las incongruencias entre las leyes laborales y las leyes sobre VIH/SIDA, la falta de registros o la existencia de registros deficientes, la escasa información y difusión de esta problemática, las dificultades para aplicar la garantía de confidencialidad y la falta de planes de educación sexual.

La docente de la Universidad Católica de Perú se refirió a tres formas de violencia contra la mujer que se daban en ese país: la violencia sexual en el matrimonio, las prácticas forzadas de control reproductivo y la violación sexual.

La expositora indicó que abordar la violencia contra la mujer desde un enfoque de derechos humanos es de fundamental importancia y que es necesario basarse en metodologías y prácticas que sirvan de pauta para la formulación de políticas públicas. Para ello es necesario incorporar el enfoque de género en todas las etapas de estudio, formulación y aplicación de estas políticas, a fin de que puedan convertirse en respuestas adecuadas para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer.

b) Migración internacional

El panel sobre migración internacional fue moderado por Iván Prudencio, Oficial de Programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia. Las presentaciones estuvieron a cargo de Gabriela Rodríguez, Jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Chile; Jorge Martínez experto del Área de Población y Desarrollo del CELADE - División de Población de la CEPAL; María del Carmen Feijoó, Oficial de Enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina, en representación de Luis Mora, del Equipo de Apoyo Técnico del UNFPA, y Violeta Correa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina (INADI). Los comentarios fueron realizados por Fanny Polanía, de la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de República Dominicana.

La Jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Chile recordó que las migraciones son resultado de las desigualdades económicas y las violaciones de los derechos humanos. Los abusos contra los migrantes son mucho más comunes en el caso de los indocumentados, que no tienen protección jurídica y, dado que se encuentran en una situación administrativa irregular, temen denunciar estos abusos por miedo a ser sancionados y deportados. El principal problema que se plantea en este contexto es que los países no han promulgado leyes adecuadas al compromiso internacional de poner fin a este estado de cosas.

La trata de personas y el tráfico de migrantes son considerados como formas de vulneración de los derechos individuales y, a la vez, como situaciones límite que, en muchos casos, son producto de omisiones del Estado y que pueden consistir, entre otras cosas, en una omisión de prevención de la migración irregular y en la no ratificación de los acuerdos internacionales, o bien su ratificación sin la homologación correspondiente en la legislación nacional.

Para concluir, la oradora hizo un llamado a la sociedad civil para que ayude a proteger los derechos de los migrantes, que en muchos casos están en manos de grupos organizados de delincuentes y sometidos al abuso y la esclavitud, por lo que la acción de la sociedad civil es indispensable para protegerlos.

El representante del CELADE-División de Población de la CEPAL basó su presentación en dos premisas: i) el examen de la migración internacional podría ser útil para el desarrollo de la agenda sobre derechos humanos y ii) existe la necesidad de incorporar el discurso de derechos humanos en la agenda de investigación sociodemográfica.

Para establecer una agenda de derechos humanos relacionada con la migración internacional el expositor insistió en que convendría identificar los derechos que estaban siendo transgredidos, los factores subyacentes y la proporción de migrantes afectados. Los estudios podrían hacerse a nivel nacional, mediante las estadísticas migratorias, policiales y sociales, a nivel de la sociedad civil, en la que existe experiencia en materia de protección y asistencia de los migrantes, así como en el sistema internacional, donde el avance en la agenda de derechos de los migrantes se relaciona con los trabajos, informes y recomendaciones de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito de las Naciones Unidas se han desarrollado instrumentos como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares que había sido ratificada solo por 34 países, lo que hacía suponer que existía una renuencia basada en el temor de que las legislaciones nacionales se vieran sobrepasadas y la posibilidad de tener que implementar servicios para los migrantes en igualdad de condiciones que para los nacionales.

A modo de conclusión, indicó que desde el punto de vista de los estudios de población, es posible sistematizar las evidencias de violación de los derechos y el trabajo de construcción de indicadores de progreso en la materia.

La Oficial de Enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina señaló que debía tomarse con cautela la idea de la “feminización” de la migración, ya que el aumento de las cifras de la migración femenina en los últimos cuarenta años no son significativas. La novedad radicaba en las nuevas tendencias, características y consecuencias de la migración de mujeres. Además, señaló que era necesario reconocer la existencia de una autonomía propia de las mujeres para migrar, lo que se relacionaba con las nuevas demandas del mercado del trabajo y con características como el incremento del nivel educativo de las mujeres.

Sostuvo asimismo que la perspectiva de género aplicada al análisis de los procesos migratorios conducía a la consideración de características como la constitución de nuevos mercados de trabajo en los países desarrollados, sobre todo en el área del cuidado, y el acceso a la salud, que se limita a quienes se encuentran asegurados, algo que se convierte en una barrera de acceso para los migrantes a este tipo de servicios, principalmente en lo referido a la salud sexual y reproductiva. Esto condujo a reflexionar acerca de la necesidad de adaptar estos servicios a poblaciones culturalmente diversas, sin que esta adaptación fuera origen de exclusión y aislamiento.

La oradora señaló que no era posible avanzar en un proceso de mejoramiento del acceso la salud sexual y reproductiva si no se aplicaba un enfoque de género a la migración.

La representante del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina realizó una breve reseña de la evolución social, histórica y jurídica de las migraciones en ese país y del rol de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, incluidos los de los migrantes.

Señaló que la falta de reglamentación de leyes específicas sobre migración impedía que las medidas previstas se aplicasen en la práctica. Sin embargo, destacó que las acciones de las organizaciones de la sociedad civil contribuían a generar un cambio, ya que hacían visibles los derechos de los migrantes.

La representante de la Organización Internacional para las Migraciones en la República Dominicana recordó que existían diversos tipos de migrantes: calificados, de mediana o baja calificación, refugiados, asilados, migrantes irregulares y migrantes captados por redes de comercio humano. Se refirió asimismo a la perspectiva de género en el análisis de la migración y a la exigibilidad de los derechos humanos de los migrantes.

Por último, los participantes abordaron el tema de la relación entre VIH/SIDA y migración, la necesidad de considerar la existencia de las familias transnacionales desde el punto de vista de los derechos humanos, y el vínculo entre las remesas y el desarrollo.

c) Envejecimiento

En este panel expusieron Margaret Kelly, del Programa de Envejecimiento de Naciones Unidas, Alejandro Morlachetti en representación de Javier Vásquez de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Sandra Huenchuan, consultora del CELADE - División de Población de la CEPAL, y Ana María Escobar, Defensora de los Derechos Humanos del Adulto Mayor de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Fue moderado por Rolando Zapata, del Servicio Nacional del Adulto Mayor

(SENAMA) de Chile y los comentarios estuvieron a cargo de José Miguel Guzmán, Punto Focal de envejecimiento y Jefe del Área de Población y Desarrollo del CELADE - División de Población de la CEPAL.

La representante del Programa de Envejecimiento de las Naciones Unidas indicó que para el año 2025 una de cada cinco personas será adulto mayor y recordó que las mujeres viven más, por lo que existe una relación directa entre el envejecimiento y el aumento del número de mujeres mayores. A esta situación se suma que la fecundidad y la mortalidad han descendido drásticamente en los últimos años por lo que en algunos países se estaría produciendo un descenso absoluto de las cifras de población, junto con el envejecimiento de esta, lo que tendría implicaciones mayores para todos los países en desarrollo.

Señaló que el empoderamiento de las personas mayores les permite ejercer sus derechos humanos por medio de la participación en el ámbito social, económico y político. Enunció asimismo cuatro principios del empoderamiento de las personas mayores, a saber: i) acceso a la información, ii) inclusión y participación, iii) rendición de cuentas por parte de los responsables de las políticas, tanto del sector público como privado y iv) capacidad de organización local.

A nivel internacional no existen documentos vinculantes que traten específicamente el tema de los derechos humanos de los adultos mayores. Las Naciones Unidas adoptó en 1991 los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad: para dar más vida a los años que se han agregado a la vida, un documento en el que se promueven los derechos de las personas mayores con relación a la independencia, la participación, el cuidado, la autorrealización y la dignidad. Asimismo, en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptado en la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, se asegura a los adultos mayores el goce de la seguridad y la dignidad y el mantenimiento de todos sus derechos como ciudadanos.

A modo de conclusión, la oradora señaló que el primer ciclo de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento se realizará en 2007 y 2008 y que se ha propuesto una modalidad participativa de evaluación por parte de los adultos mayores.

El abogado y consultor de organismos internacionales en derechos humanos, en representación de Javier Vásquez de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realizó una revisión de los instrumentos internacionales de los que se desprende un marco normativo de protección de los derechos de las personas mayores, aunque no siempre de manera explícita.

Señaló que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, entre los que se incluyen los adultos mayores. Los desafíos en la materia se circunscriben a la necesidad de que los instrumentos internacionales y regionales se utilicen para llevar a la práctica las medidas previstas y que se prevengan las violaciones de los derechos de las personas mayores.

La consultora del CELADE-División de Población de la CEPAL precisó que existen rasgos asociados a la vejez como la pobreza y las dificultades para el acceso a la jubilación y la pensión, la invisibilización de las personas mayores en la agenda del desarrollo, la discriminación de la población adulta mayor y su fragilización, dada la carencia de recursos, principalmente en el área de la salud, lo que conduce a la pérdida de autonomía de las personas mayores.

La expositora se refirió a las dimensiones del consenso político en torno a los derechos sociales: una dimensión ética, que comprende los derechos humanos; una dimensión instrumental basada en leyes y políticas y una dimensión de intervención, fundada en acciones sectoriales.

Señaló asimismo que los sistemas de protección social de los países de América Latina y el Caribe no consideraban los factores demográficos, entre ellos el envejecimiento de la población, y destacó que en el actual contexto de aumento de las necesidades de cuidado, las deficiencias de los sistemas de salud y protección social de las personas mayores es necesario un nuevo pilar para el sistema de protección social clásico: el de los servicios sociales para fortalecer la autonomía de las personas mayores.

La expositora concluyó su presentación indicando que no existía una retroalimentación entre los instrumentos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, las leyes y políticas, los programas y los adultos mayores para mejorar la condiciones de vida de estos, y que la responsabilidad cabía a los Estados, que deben fomentar y facilitar el conocimiento de estas instancias a los grupos interesados, pero también, las organizaciones de la sociedad civil, que desconocen la existencia de instrumentos aun a nivel nacional.

La Defensora de los Derechos Humanos del Adulto Mayor de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, presentó los antecedentes de la creación, misión, visión y objetivos de la Defensoría del Adulto Mayor, una instancia creada por el Procurador de los Derechos Humanos, que tutela y protege los derechos humanos de los adultos mayores en Guatemala. El objetivo general de esta Defensoría es promover y tutelar el reconocimiento y el respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas adultas mayores, para lo cual cuenta con diversos programas.

La expositora hizo referencia al proceso acelerado de envejecimiento de la población en Guatemala y a la situación de violencia y maltrato contra los adultos mayores; también señaló la preocupante situación respecto de la educación de las personas mayores, las dificultades para acceder a la atención de la salud y la escasa cobertura de la seguridad social.

El Punto Focal de Envejecimiento y Jefe del Área de Población y Desarrollo del CELADE-División de Población de la CEPAL destacó que la Estrategia Regional para la Ejecución en América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento es una herramienta a la que los países de América Latina y el Caribe pueden recurrir para identificar los derechos humanos de las personas mayores.

Con respecto a los derechos sociales de las personas mayores, señaló que la inclusión de estos derechos en las normativas nacionales era un asunto crucial. A modo de conclusión, enfatizó la necesidad de hacer efectivas las disposiciones en la materia previstas en las legislaciones nacionales, de modo que las personas mayores sean conocedoras de sus derechos y que estos sean reconocidos.

En la discusión del panel se enfatizó que la autonomía de las personas mayores pasa necesariamente por el acceso a la seguridad social, y el acceso a la salud y los cuidados adecuados en la edad avanzada. También se hizo referencia a la necesaria organización de los adultos mayores para lograr que se asignen recursos a los sistemas de pensiones y obtener microcréditos, una vía para que las personas que no tienen seguridad social generen ingresos.

Exigibilidad en derechos humanos: mecanismos e indicadores (punto 3 del temario)

Esta mesa fue moderada por Nadine Gasman, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia, y se hicieron cinco presentaciones a cargo de Rocío Barahona-Riera, vicepresidenta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Marcela Ferrer, consultora del CELADE - División de Población de la CEPAL, Ana María Rodino, coordinadora de la unidad pedagógica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), y Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Las presentaciones de esta mesa fueron comentadas por Carmen Rosa Villa Quintana, Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La vicepresidenta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales comentó que existe un amplio marco de instrumentos internacionales de derechos humanos cuyo mayor logro es la especificidad lograda a través de convenios y acuerdos, entre otros. Destacó asimismo que no hay diferencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales en cuanto a la protección de su juridicidad.

El segundo tema que trató fue la necesidad de que existan indicadores especiales de derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto se han propuesto varios tipos de indicadores: i) estructurales, que establecerían el marco jurídico de un derecho en un país, ii) de proceso, que señalarían el esfuerzo realizado por un país para lograr la progresividad de los derechos y iii) de resultado, que revelarían las políticas y los logros alcanzados.

La consultora del CELADE-División de Población de la CEPAL explicó que la utilización de indicadores en materia de derechos humanos no era nueva, pero esta no había sido sistemática y que en el marco de la reforma de las Naciones Unidas se habían generado nuevas directrices para la preparación de informes por parte de los países, que deberán incluir información estadística del estado de la población, lo que comprende indicadores de derechos humanos. No obstante ello, existen debates acerca de la ausencia de compromiso y de consenso en torno a la medición de los derechos económicos, sociales y culturales, y las dificultades de diferenciación entre indicadores de desempeño e indicadores globales de aplicación del enfoque de derechos.

La expositora presentó la propuesta para la elaboración de indicadores de derechos humanos en materia de población sobre la base de indicadores de contexto (que incluyen el contexto sociopolítico, sociodemográfico y socioeconómico) y la identificación de derechos humanos relativos a la fecundidad, la mortalidad y la migración.

Señaló que la identificación de derechos humanos en materia de población consiste en definir las cuestiones que son indispensables para que hombres y mujeres puedan elegir e implementar libre e informadamente sus propios proyectos de vida. Los indicadores de derechos humanos en materia de población se construyen mediante la determinación del contenido del derecho y sus atributos con relación a la población y una revisión exhaustiva de los tratados y convenciones de derechos humanos, lo que permite realizar una definición nominal y, a partir de esta, identificar la obligación del Estado de proteger, respetar y hacer efectivo ese derecho.

La expositora finalizó presentando algunas recomendaciones para la implementación de un sistema de indicadores en materia de población y propuso la definición de mecanismos de contacto permanente con diferentes organizaciones para alimentar y utilizar el sistema.

La coordinadora de la unidad pedagógica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) se refirió a la relación de doble vía entre la educación en derechos humanos y las políticas públicas, ya que la educación en derechos humanos impulsa la construcción de políticas públicas, al mismo tiempo que estas crean las condiciones para que esos derechos se hagan realidad.

Enunció tres principios que caracterizan a la educación en derechos humanos, a saber: buscar el desarrollo pleno de la personalidad humana; fortalecer el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, y promover las actividades de las Naciones Unidas para la paz.

Señaló asimismo que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) concibe a la educación en derechos humanos como parte integral del derecho general a la educación y que se lo considera una condición necesaria para el ejercicio activo de los derechos humanos en su conjunto. La educación en derechos humanos se dirige a tres grupos: los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, los agentes del Estado, y los académicos y formadores de opinión pública, grupos que tienen la posibilidad de crear o transformar las políticas públicas.

La codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas analizó el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del derecho internacional. Señaló que este reconocimiento comienza a nivel general al hacer explícitos los derechos de las minorías, entre las que se cuentan los pueblos indígenas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante los que se reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos y el derecho a profesar sus prácticas religiosas, desarrollar su vida cultural y emplear su propio idioma.

Recordó que en el ámbito de la exigibilidad, estos documentos prevén la existencia dos órganos de supervisión del cumplimiento de los derechos humanos: el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

A nivel específico también ha habido un desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas mediante la creación de la Relatoría Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas, que ha elaborado informes de país e informes temáticos sobre la situación de los indígenas. El instrumento más importante en el contexto internacional es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que da cuenta de la evolución de los derechos de estos pueblos en el derecho internacional. La Declaración reconoce el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos que poseen de forma tradicional, así como a su uso, desarrollo y control y a su restitución cuando han sido privados de estos.

En la segunda parte de la exposición, analizó la situación de los pueblos indígenas en Chile y señaló que si bien se han realizado avances, persisten las desigualdades. Los indígenas son más pobres que los no indígenas, las familias indígenas reciben en promedio la mitad de los ingresos con relación a las familias no indígenas, y las cifras de escolaridad, acceso a los servicios de salud y acceso a los servicios básicos son más bajas en los indígenas que en los no indígenas.

La Representante Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ahondó en el tema de la definición de indicadores para la medición de la progresividad de los derechos humanos y señaló que era necesario definir a nivel nacional cuál sería la entidad responsable de cada indicador. Señaló además que sería favorable la incorporación de indicadores cualitativos.

Por último, mencionó cuatro recomendaciones para hacer exigibles los derechos humanos: i) mayor integración de las reglamentaciones jurídicas internas, ii) respeto y aplicación de las decisiones judiciales, iii) fortalecimiento de la colaboración de la sociedad civil y iv) coordinación con los organismos internacionales para que los derechos sean realmente progresivos y no regresivos. Se reconoció la importancia del aporte de la experiencia del Estado en el sistema de indicadores y de la formulación de informes simples que permitan la comparación de estos entre países.

Al término de la reunión, el Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL agradeció la participación de todos los asistentes y reiteró que el Centro continuará trabajando en la incorporación del enfoque de derechos humanos en los estudios de población.

Anexo

LISTA DE PARTICIPANTES

Panelistas

ARGENTINA

- Violeta Correa, representante, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
- María del Carmen Feijoo, Oficial de Enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
- Alejandro Morlachetti, abogado y consultor de organismos internacionales en derechos humanos

BOLIVIA

- Iván Prudencio, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

CHILE

- José Bengoa, Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Jorge Bravo, Asesor regional, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL
- Marcela Ferrer, Consultora, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL
- José Miguel Guzmán, Punto focal de Envejecimiento y Jefe del Área de Población y Desarrollo, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL
- Sandra Huenchuan, Consultora, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL
- Dirk Jaspers, Director, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL
- Jorge Martínez, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL
- Gabriela Rodríguez, Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
- Andras Uthoff, Oficial a cargo, División de Desarrollo Social, CEPAL
- Carmen Rosa Villa Quintana, Representante Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- Nancy Yañez, Codirectora, Observatorio de Derechos de los Indígenas
- Rolando Zapata, Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)

COSTA RICA

- Ana Elena Badilla, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
- Rocío Barahona-Riera, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Naciones Unidas
- Ana María Rodino, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

ECUADOR

- Mercedes Borrero, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

ESTADOS UNIDOS

- Margaret Peggy Kelly, Programa de Envejecimiento de las Naciones Unidas
- Lilian Sepúlveda, Centro de Derechos Reproductivos

GUATEMALA

- Ana María Escobar, Procuraduría de los Derechos Humanos
- Nadine Gasman, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

MÉXICO

- Sara Gordon, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

PERÚ

- Violeta Bermúdez, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Perú
- Jairo Palacio, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

REPÚBLICA DOMINICANA

- Fanny Polanía, Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Invitados especiales

ARGENTINA

- Corina Courtis, Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires

BOLIVIA

- Antonio Gómez, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

CHILE

- Carola Aranda, Asociación Chilena pro Naciones Unidas
- Osvaldo Torres, Asociación Chilena pro Naciones Unidas
- Pedro Paulo Marín, Centro de Geriátría y Gerontología, Universidad Católica de Chile
- Lorena Fries, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género “Corporación Humanas”
- Paula Salvo, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género “Corporación Humanas”
- Gustavo Busso, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL
- Fabiana Del Popolo, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL
- Jorge Rodríguez, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL
- Milagros Nehgme, Corporación Opción
- Jenny Lowick, Hogar de Cristo

- Luis Ossa Valdivia, Hogar de Cristo
- María Inés Parga Mate de Luna, Hogar de Cristo
- María Victoria Leal Valladares, Instituto Chileno Católico de Migración (INCAMI)
- Rolando Jiménez, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH)
- Álvaro Bello, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
- Luis Rojas, Observatorio Interamericano de Migraciones (OCIM)
- Sylvia Broder, Oficial de Programa, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Carolina Huatay, Programa Social Integral a Migrantes - ProAndes
- Ximena Romero, Red Latinoamericana de Gerontología
- Juan Manuel Sotelo, Representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Chile
- Enrique Ganuza, Representante del PNUD en Chile
- Carolina Stefoni, Universidad Alberto Hurtado
- Juan Carlos Cuevas, Asociación Chilena pro Naciones Unidas

HAITÍ

- Renand Dorelien, Instituto Haitiano de Estadística e Informática
- Gabriel Bidegain, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

MÉXICO

- Mónica Villarreal, abogada y consultora independiente

PARAGUAY

- Mirtha Rivarola, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

PERÚ

- Pilar Norza Hernández, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Lima

VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)

- Mary Carmen Villasmil, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)